

## **REPÚBLICA DE COLOMBIA**



### **RAMA JUDICIAL**

### **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

### **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, dieciocho (18) de julio de dos mil veintidós (2022)**

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por MARIA DEL CARMEN MARIN SANCHEZ en contra de COLPENSIONES (Radicado 05001-31-05-021-2018-00401-01).

### **ANTECEDENTES**

Pretende la parte actora, previa declaración que le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su padre el señor José Abraham Marín Guerra, se condene a la entidad accionada al reconocimiento y pago de dicha prestación a partir del 19 de abril de 2015, las mesadas adicionales de junio y diciembre, los reajustes de ley, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación sobre las sumas adeudadas y las costas del proceso (fl. 2).

Como sustento de sus pretensiones manifiesta en síntesis lo siguiente: tiene una pérdida de capacidad laboral del 59.7%, por lo que es inválida, con fecha de estructuración el 28 de marzo de 1985; es hija del señor José Abraham Marín Guerra, quien ostentaba la calidad de pensionado de Colpensiones desde el 1° de mayo de 1985 en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente; su padre falleció el 19 de abril de 2015, dependía económicamente de él; el 5 de abril de 2018 solicitó ante Colpensiones la pensión de

sobrevivientes, la misma que le fue negada por la entidad mediante Resolución SUB 145562 del 30 de mayo de 2018, con el argumento que ella no dependía económicamente de su padre al tener un hijo vivo, para lo que aplicó el artículo 411 del Código Civil “es deber de los hijos velar por los alimentos y necesidades de su madre”; su hijo, de nombre Rubén Darío Marín Sánchez, se encuentra privado de la libertad en el INPEC-MEDELLIN desde hace un año aproximadamente; su madre, María Lucia Sánchez Marín falleció el 21 de enero de 2000 (fls. 1/2).

La entidad demandada dio respuesta oportuna al escrito inicial. Se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones. Aceptó los hechos relacionados con el fallecimiento del pensionado, la solicitud presentada por la accionante y la respuesta dada por la entidad. Sobre los demás dijo que no le constaban. Como excepciones formuló las de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar a la demandante la prestación solicitada, prescripción, improcedencia de la condena por intereses moratorios, buena fe, imposibilidad de condena en costas, improcedencia de la indexación, compensación y la genérica.

El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 1° de junio de 2021, condenó a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión deprecada a partir del 19 de abril de 2015, en la misma cuantía en que era percibida por el pensionado fallecido, indicando que el retroactivo será calculado por la entidad teniendo en cuenta la fecha de la causación y la fecha de pago, luego de verificar el valor de la mesada pensional de vejez del causante. Condenó igualmente a la accionada al pago de la indexación sobre las mesadas pensionales reconocidas, calculada desde que cada mesada se hizo exigible y hasta que se verifique el pago total de la obligación. Autorizó a Colpensiones a descontar del valor del retroactivo las sumas destinadas al pago de la seguridad social en salud. Por último, le impuso las costas a la parte demandada, fijándole como agencias en derecho el 4% del retroactivo causado hasta la fecha del fallo de primera instancia.

Contra la decisión interpuso recurso de apelación el apoderado de la parte actora, manifestando su disenso por la no imposición de los intereses

moratorios, señalando que a la entidad accionada le faltó mayor diligencia en la investigación administrativa adelantada, en cuanto a la comprobación de la dependencia económica de la actora frente a su padre fallecido.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

#### CONSIDERACIONES:

La Sala efectuará el análisis del punto objeto de apelación planteado por el mandatario inconforme al tenor de las directrices que establecen las regulaciones legales que rigen el asunto, no sin antes advertir el estudio de los demás tópicos controvertidos por el grado de la consulta, al estar involucrada Colpensiones como entidad vencida en juicio, y en atención a las pautas que en este sentido tiene establecida la jurisprudencia laboral.

A este respecto debe indicarse, que son hechos debidamente acreditados en el proceso: i) la calidad de hija que tenía la demandante del señor José Abraham Marín Guerra (fl. 21), ii) que éste era pensionado por vejez por parte de Colpensiones desde el 1° de mayo de 1985 (fl. 30), iii) que falleció el 19 de abril de 2015 (fl. 20), que la señora María del Carmen tiene una pérdida de capacidad laboral del 59.7%, con fecha de estructuración del 28 de marzo de 1985 (fls. 24/28), iv) que presentó solicitud ante Colpensiones el 05/04/2018 pidiendo la pensión de sobrevivientes, misma que le fue negada mediante Resolución SUB145562, del 30 de mayo de 2018, con el argumento que era obligación del hijo de ella el sostenimiento de su madre, es decir, que la demandante no dependía económicamente de su padre fallecido.

Con el fin de darle un orden lógico al asunto de debate, se hace necesario inicialmente analizar por consulta si el derecho a la pensión de sobrevivientes fue bien reconocido por el juzgador de instancia para luego, de ser el caso, estudiar la posibilidad del reconocimiento de los intereses moratorios.

En este sentido, valga decir que, dada la fecha de fallecimiento del causante, esto es, 19 de abril de 2015, las normas a aplicar son los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, que hacen referencia a los requisitos y beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.

Y al respecto, el ya referido artículo 13 dispone, frente a lo que interesa en este proceso, lo siguiente:

*“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes*

*[...]*

*c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;*

Lo primero por decir es que el juez de instancia para acoger las súplicas de la demanda, entre otros argumentos, expresó que conforme a los testimonios rendidos al interior del plenario, se pudo evidenciar que la demandante dependía económicamente de su padre fallecido, pues los mismos son contestes al indicar que era éste quien velaba por sus necesidades, cubriéndole todos los gastos que fueron necesarios, y que si bien también recibía una ayuda de un hermano, era porque él igualmente vivía en la casa de habitación de su padre, que lo obligaba a aportar para los gastos.

Tales argumentos, en sentir de esta Sala de Decisión Laboral, se ajustan a derecho, pues dejando de lado la calidad de inválida que tenía la accionante al momento del fallecimiento de su padre, quedaba pendiente por analizar la dependencia económica de esta respecto de aquel, la cual, como lo señaló el juzgador de instancia, quedó debidamente acreditado con el acervo probatorio obrante en las diligencias, principalmente las testimoniales, teniendo en cuenta que a ellas prácticamente se reduce el material probatorio tendiente a acreditar el requisito que se busca.

Para iniciar, debe señalarse que en la sentencia C-111 de 2006, la Corte Constitucional dejó asentados varias reglas jurisprudenciales que permiten determinar si una persona es o no dependiente económicamente de otra a partir de la valoración del denominado mínimo vital cualitativo, las cuales fueron sintetizados en la sentencia con radicado SL296-2020, de la siguiente manera:

1. *“Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna.*
2. *El salario mínimo no es determinante de la independencia económica.*
3. *No constituye independencia económica recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993.*
4. *La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional.*
5. *Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes.*
6. *Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica”*

En tal sentido, considérese las probanzas obrantes entre folios 34 y 35 consistente en sendas declaraciones extra juicio de Rodrigo Cano García y Luz Marina Herrera Tobón en la que señalan que conocían al señor José Abraham Marín Guerra desde hacía 40 años en calidad de vecinos, manifestando igualmente que era este quien respondía por el sustento de la señora María del Carmen Marín Sánchez, brindándole alimentación, recreación, salud, vivienda, vestido y en general todas las necesidades que ella tuviera, adicionando que debido a la incapacidad que esta padece nunca ha podido laborar. Tales declaraciones fueron ratificadas al interior del proceso mediante los testimonios rendidos en la oportunidad procesal pertinente.

La señora Luz Marina agregó en su testimonio que al momento del fallecimiento del señor José Abraham, este vivía con María del Carmen y otro hijo de nombre Jorge, quien había llegado a ese hogar hacia más o menos un año, refiriendo que los otros hijos del causante se fueron de ese hogar y no volvieron. Refirió que el señor Jorge trabajaba en una empresa y que María del Carmen nunca ha trabajado, pues era el padre quien se hacía cargo de ella. Indicó igualmente que María del Carmen estuvo casada pero que el esposo de ella murió hace muchos años, como 18, sin que le haya dejado pensión o renta alguna. Agrega que María del Carmen tiene dos hijos, uno en la cárcel hace por ahí 7 años y la hija hace muchos años que se fue y no volvió, y que el hijo no trabajaba y también lo sostenía el abuelo cuando vivía en la casa. Aduce que cuando vivía con su padre, Jorge colaboraba con el pago de los servicios, y que la casa donde viven es una herencia en este momento.

En igual sentido el señor Rodrigo Cano García, quien en los mismos términos de la declaración extrajuicio, hizo referencia al tiempo que hacía que conocía a la señora María Carmen, refiriendo que desde que era niña, dado que son vecinos hace muchos años, certificando que ella nunca ha trabajado y sabía que el señor José Abraham era quien solventaba los gastos del hogar, dado que él era pensionado. Al momento de la muerte del señor José Abraham vivía con María del Carmen y un hijo de ésta de nombre de Rubén Darío quien no hacía absolutamente nada, vivía de su abuelo. También vivía otro hijo de don José de nombre Jorge, quien trabajaba en Proleche. Refirió que María del Carmen vivía de su padre, y si bien el hermano colaboraba con los servicios de la casa, era don José quien se hacía cargo de María del Carmen, por cuanto ella nunca trabajó. Señaló que María del Carmen tenía otra hija pero que esta se fue del hogar y nunca más volvió, y que estuvo casada, pero quedó viuda hace muchos años, sin que el esposo le haya dejado nada. Indicó que luego de la muerte de don José, ella siguió viviendo muy precariamente, de lo que le pueda ayudar el hermano Jorge.

No puede pasarse por alto que se tratan de testigos directos de los hechos, en tanto se trata de vecinos y amigos de la parte actora, que narran con aire de sinceridad y exentos de suspicacias y/o mala fe que en vida fue el causante

quien veló por la manutención de la hoy reclamante, asumiendo los gastos de servicios, alimentación, vestido y demás.

De lo anterior, resulta dable concluir que efectivamente la señora María del Carmen Marín Sánchez dependía económicamente de su padre el señor José Abraham Marín Guerra, pues quedó evidenciado que es inválida, que nunca ha trabajado, y que era éste quien cubría todas sus obligaciones, dejando de lado la colaboración que al hogar le pudo brindar el señor Jorge Marín en los últimos meses antes de la muerte de su padre, por cuanto tal ayuda no desvirtúa la condición de dependencia que se demostró en el proceso, a más de que no cabe duda que la actora, dada su discapacidad, nunca abandonó el lugar de habitación familiar que conformó con sus padres, y además no percibió ninguna entrada de dinero que le pudiera proporcionar su sostenimiento.

No resulta de recibo para esta Sala los motivos tenidos en cuenta por la administradora para negarle el derecho a la accionante, por cuanto debió de analizar con mayor profundidad cuales eran las verdaderas condiciones mediante las cuales la señora María del Carmen obtenía su subsistencia, y que si bien existe obligación legal por parte de los hijos frente a sus padres, debe analizarse en cada caso concreto si la ayuda que estos puedan brindar hace que quien la reciba mantenga una vida digna, elemento este que no fue considerado por la administradora para la resolución de la solicitud, pues no bastaba con referir la sola existencia de un hijo para desvirtuar la dependencia de la accionante frente a su padre fallecido, sino que se hacía necesario comprobar que ese hijo efectivamente le brindaba a su madre la ayuda que le permitiera satisfacer sus necesidades.

Debe rememorarse que en lo relativo a la dependencia económica, esta Sala de Decisión en múltiples oportunidades a recurrido a la doctrina para establecer la misma, partiendo de su definición que alude a: *“...la situación de las personas que por su edad, nexo parental o incapacidad obtienen la subsistencia cotidiana por el trabajo o dinero que reciben de otra...”* (Guillermo

Cabanellas, Diccionario de Derecho Usual, Tomo III, Ed. Heliasta, 24ª ed., pág. 88).

Así las cosas, se mantendrá la imposición de la condena por la pensión como tal, incluso desde la misma fecha determinada por la a quo y, por tanto, la causación de la pensión desde la fecha del fallecimiento y en iguales términos a los descritos en la sentencia apelada, dado el desconocimiento frente al valor de la mesada pensional que se encontraba recibiendo el causante al momento de su muerte.

Finalmente, y entrando ya en lo cuestionado por el apelante, esto es, en lo concerniente a la imposición de los intereses de mora, baste decir que quedó demostrado que la señora María del Carmen Marín Sánchez elevó la solicitud ante la entidad deprecando la pensión de sobrevivientes el 5 de abril de 2018, la misma que fue negada por la entidad mediante la Resolución SUB145562, del 30 de mayo de 2018, con el argumento que era obligación del hijo de ella el sostenimiento de su madre, es decir, que la demandante no dependía económicamente de su padre fallecido.

Puestas así las cosas, y teniendo en cuenta los argumentos esbozados con anterioridad, no le cabe duda a esta Corporación que le asiste el derecho a la accionante al reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por parte de la accionada, pues la entidad tenía hasta el día 5 de junio de 2018 para atender la solicitud de la señora Marín Sánchez, conforme a la Ley 717 de 2001, sin que lo haya hecho y el argumento dado no resulta suficiente para esta Corporación, dando lugar a la revocatoria de la sentencia sobre este asunto, señalando que tales intereses se causarán a partir del 6 de junio de 2018 y hasta la fecha del pago efectivo de la obligación, teniendo en cuenta para ello la tasa máxima de interés moratorio vigente para tal data y la causación de cada mesada pensional, por lo que habrá lugar a revocar la sentencia por concepto de indexación, dado el carácter de excluyentes que tienen ambas prestaciones.



Sin más para resolver entonces y visto el asunto desde donde se quiera, la sentencia venida en apelación se habrá de confirmar, excepto en cuanto a los intereses moratorios y la indexación, asuntos que se revocan dando cuenta de ello en la parte resolutive de la presente decisión. Sin costas en esta instancia.

#### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de apelación y consulta excepto en cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de las condenas y, en su lugar, se CONDENA a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a pagarle a la señora MARIA DEL CARMEN los primeros en los términos descritos en la parte motiva de esta providencia, y se ABSUELVE a dicha administradora del pago de la segunda.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (numeral 3° del literal d, del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y AL2550-2021, CSJ).

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

<b>Radicación:</b>	<b>05001310502120180040101</b>
<b>Proceso:</b>	<b>Ordinario</b>
<b>Demandante:</b>	<b>MARIA DEL CARMEN MARIN SANCHEZ</b>
<b>Demandado:</b>	<b>COLPENSIONES</b>
<b>M. P.</b>	<b>CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES</b>
<b>Fecha de fallo:</b>	<b>18/07/2022</b>
<b>Decisión:</b>	<b>CONFIRMA Y REVOCA</b>

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 19/07/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario